

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N°049

Medellín, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelven los recursos de apelación interpuestos en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **ILDUARA MARÍA GAVIRIA ESPINOSA** contra **PROTECCIÓN S.A.** y **ESTEBAN ARANGO LÓPEZ**.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

La actora solicita que se condene a **Protección S.A.** a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes generada con ocasión de la muerte de su compañero permanente el señor **Carlos Arturo Arango Bedoya**, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación de las condenas.

Hechos

Como fundamento de sus pretensiones manifestó que convivió con el señor **Carlos Arturo Arango Bedoya** desde el año 2011 y hasta el 2 de septiembre de 2018, compartiendo techo, lecho y mesa de forma ininterrumpida.

Con ocasión de la muerte de su compañero presentó reclamación pensional ante **Protección S.A.** entidad que negó el reconocimiento y pago de la misma por no acreditar el requisito de convivencia.

Contestación Protección S.A.

La AFP demandada a través de apoderada manifestó que es cierto que el causante era su afiliado y que a reclamar la pensión de sobrevivientes generada con ocasión de su muerte se presentó la demandante, anotando que tal prestación fue negada por no cumplirse con el requisito de convivencia, en razón a que en investigación adelantada por esa entidad se pudo constatar que el afiliado se encontraba divorciado ocho años antes de su muerte y desde el momento de su separación convivió con sus padres.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: cumplimiento del artículo 294 del CST, no se acreditó convivencia, pago al beneficiario, inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, cobro de lo no debido, buena fe, pago y compensación y prescripción.

De la integración por pasiva del hijo del causante

El Juez del conocimiento mediante auto del **19 de abril de 2022** dispuso la vinculación del hijo del causante como litisconsorte necesario.

El vinculado a través de apoderado dio respuesta a la demandante indicando es cierto que la demandante reclamó la pensión de sobrevivientes generada con ocasión de la muerte de su padre y que esta le fue negado, en la medida que es falso que conviviera con su progenitor durante los 8 años que se afirma en la demanda, puesto que tal convivencia si existió pero solo por el lapso de 14 meses entre el año 2017 y junio de 2018, con posterioridad a esta fecha su padre se trasladó a vivir donde su abuela.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones inexistencia de la obligación, improcedencia de intereses moratorios y prescripción.

Sentencia de primera instancia

El Juez Catorce Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **17 de febrero de 2023**, **declaró** que a la demandante le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes generada con ocasión

de la muerte del afiliado **Carlos Arturo Arango Bedoya** por lo que condenó a **Protección S.A.** a reconocer y pagar la prestación en un 50% a partir del **2 de septiembre de 2018**, disponiendo que sobre las mesadas adeudadas se reconozca la indexación y autorizando a la AFP para descontar de las misma el valor de las contribuciones al sistema de salud a cargo de la pensionada.

En lo referente al litisconsorte necesario, lo absolvió del reconocimiento de cualquier eventual condena, autorizando a **Protección S.A.** para que desde la fecha de la sentencia proceda a reconocer la mesada pensional en un 50%.

En sustento de su decisión indicó que si bien la prueba testimonial presenta la existencia de dos versiones contrapuestas y coherentes, encuentra fundamentada la narración de los hechos presentada por la parte actora, pues existen hechos indiscutidos como la ludopatía del causante y sus episodios de alcoholismo, que permiten establecer que fue atribuible a él las constantes interrupciones que tuvo la vida en común de la pareja, la que pese a estas situaciones siempre mantuvo un ánimo de convivencia común.

Esta decisión no la compartieron los apoderados de la demandante y **Protección S.A.**, motivo por el cual la apelaron en los siguientes términos:

Recurso de apelación demandante

El recurrente solicita que se **revoque** la decisión de primera instancia en lo referente a la negativa al reconocimiento de los intereses moratorios, por cuanto a su juicio no se cumplen las condiciones para la exoneración de esa carga resarcitoria a la administradora de pensiones, toda vez que no existió una evidente controversia entre los beneficiarios del derecho, además de que el fondo de pensiones no aportó al proceso los elementos en los que fundamentó sus razones para una negativa de la pensión en favor de su representada.

Recurso de apelación Protección S.A.

Por su parte de la apoderada de la parte demandante solicita que se **revoque** en su integridad la decisión de primera instancia, por cuanto no se demostró por la parte actora la existencia de una convivencia de 5 años anteriores a la muerte, máxime cuando se confiesa por parte de la propia actora que para la fecha de la muerte del causante se encontraban separados hace por lo menos un mes, estando su convivencia llena de altibajos.

Además de lo anterior indica que en las diferentes entrevistas adelantadas en desarrollo de la investigación administrativa, se pudo constatar que el demandante vivía con su madre, por lo que la demandante no tenía la condición de compañera permanente de la demandante para la fecha de la muerte del causante.

En lo que refiere a la prueba testimonial traída al proceso, destaca que los mismos no respaldan sus dichos en el conocimiento derecho de los hechos, además de que no es aplicable en este caso un enfoque de género, puesto que, la separación de la pareja se dio por razones de celos.

En caso de que se considere cumplido el requisito para acceder a la pensión, el reconocimiento debe hacerse a partir de la sentencia por cuanto se hace por aplicación jurisprudencial, o en caso de no atenderse este argumento se indique que el responsable de reconocer el retroactivo es Esteban Arango López a quien se le reconoció desde el momento de la muerte del causante.

En lo que refiere a la indexación indica que no procede toda vez que la mesada se actualiza anualmente.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado, la apoderada de **Protección S.A.** solicitó que se revoque la decisión de primera instancia, por cuanto no se demostró que la actora conviviera de forma ininterrumpida con el causante por lo menos en los últimos cinco años anteriores a la muerte.

Para sustentar su afirmación señala que desde el interrogatorio de parte la actora confesó que para la fecha del fallecimiento del afiliado se encontraban separados por celos de este y que tuvieron múltiples separaciones por esta razón, lo que denota que no existió una convivencia continúa.

En el remoto caso de que se confirme la decisión de primera instancia solicita que se impuesto su pago desde el momento de ejecutoria de la sentencia y que no se imponga condena al pago de intereses, en razón a que tuvo fundamentos facticos para negar la prestación solicitada.

CONSIDERACIONES

Problema Jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta instancia de conformidad con los recursos interpuestos, serán: (i) Establecer si la señora **Ilduara María Gaviria Espinosa** cumple con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes generada con ocasión de la muerte del afiliado **Carlos Arturo Arango Bedoya**, en caso de que se determine la procedencia del derecho reclamado, se deberá (ii) revisar si está obligada **Protección S.A.** a reconocer la prestación desde el momento de la muerte del causante o si en este sentido tiene alguna responsabilidad el hijo del causante a quien le fue reconocida la pensión en un 100% y (iii) finalmente determinar si proceden los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o si en subsidio de los mismos debe ser reconocida la indexación de las condenas.

Pruebas relevantes

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente:

1. El señor **Carlos Arturo Arango Bedoya** falleció el día **2 de septiembre de 2018** (04/pág.12), en vigencia de la Ley 797 de 2003.
2. El día **18 de marzo de 2019**, la actora solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en calidad de compañera permanente del causante (04/pags.19-21).
3. Mediante comunicado del **11 de septiembre de 2019**, **Protección S.A.** informó a la demandante el rechazo de su solicitud pensional por no cumplir con el requisito de convivencia con anterioridad a la fecha de la muerte, toda vez que, para esa fecha no se encontraban viviendo juntos (04/pág.26).
4. Al causante le sobrevivió su hijo **Esteban Arango López**, nacido el 17 de junio de 2006 (07/pág.114).
5. Mediante comunicación del **20 de diciembre de 2019**, **Protección S.A.** reconoció la pensión de sobrevivientes generada con ocasión de la

muerte del causante a su hijo menor de edad **Esteban Arango López** (07/pags.112-113).

Una vez efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a dar respuesta al problema jurídico propuesto:

El requisito de convivencia para acceder a la pensión de sobrevivientes por la muerte de un afiliado

El artículo 13 de la Ley 797 de 1993, norma vigente al momento del fallecimiento del afiliado **Carlos Arturo Arango Bedoya**, sucedido el día **2 de septiembre de 2018**, expresa:

Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes

[...]

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la *compañera o compañero permanente* o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la *compañera o compañero permanente* supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

El texto de esta norma ha tenido dos interpretaciones que pueden identificarse en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la primera que indica que no existe discusión entre la calidad de afiliado y pensionado para la aplicación de la norma, siendo exigible en ambos casos una convivencia de 5 años. Muestra de esta posición es la sentencia radicado 32356 del 7 de febrero de 2008, en la que se indicó:

...Visto lo anterior, en ningún error jurídico pudo haber incurrido el sentenciador de segundo grado al interpretar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, si se tiene en cuenta que las pensiones de sobrevivientes cuando se trata no solo de compañeras o compañeros permanentes, sino también de cónyuges de personas afiliadas o pensionadas fallecidas, están cimentadas sobre la efectiva convivencia con éstas...

Esa lectura de la norma se mantuvo en el tiempo, encontrándose como antecedentes más recientes las sentencias SL-20953 de 2017, SL-866 de 2018 y SL-868 de 2018. En esta última se expresó:

La jurisprudencia de la Sala ha precisado que tanto el cónyuge como el compañero (a) permanente están compelidos a demostrar el cumplimiento del requisito de convivencia en el lapso previsto en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, independientemente de que se trate de la muerte de un afiliado o de un pensionado. La vida en común debe existir al momento de la muerte y en el término no menor a cinco años continuos con anterioridad a ésta, con la excepción admitida para los casos especiales del cónyuge separado de hecho pero con vínculo matrimonial vigente, en los términos delimitados en sentencias que no es del caso invocar, por no ser esa la situación del sub lite.

De este precedente sostenido hasta la sentencia SL-1401 del 4 de marzo de 2020, se destaca la necesidad de la demostración de dos elementos: uno subjetivo, consistente en la necesidad de demostrar la existencia de una comunidad de vida concebida en el apoyo mutuo, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual que tienen como fin consolidar un proyecto de vida y uno temporal, consistente en que la misma se extendiera por un término no inferior a 5 años.

La segunda interpretación aparece con la sentencia SL-1730 de 2020¹, en la que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, indicó que es necesario diferenciar entre la condición de pensionado y afiliado, siendo exigible el requisito de tiempo de convivencia únicamente para la sustitución pensional, puesto que lo que quiso el legislador fue evitar que en los casos de pensionados se pudieran presentar fraudes por convivencias de último momento.

Se destaca además en la tesis sostenida por Alto Tribunal que no existe diferenciación entre cónyuge y compañera/o, puesto que, lo que se privilegia es la protección del núcleo familiar sin importar si el mismo obedece a un vínculo legal o natural.

Este cambio de precedente motivó que la entidad condenada² presentara acción de tutela, por considerar que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia

¹Reproducida con posterioridad en las sentencias CSJ SL3843-2020, CSJ SL3785-2020, CSJ SL4606-2020, CSJ SL489-2021, CSJ SL362-2021, CSJ SL1905-2021, CSJ SL2222-2021 y SL-5270-2021.

²ARL Positiva S.A.

incurrió en causales de procedencia de tutela contra providencia judicial por defecto sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional.

Esta queja fue objeto de revisión por la Corte Constitucional que en sentencia SU-149 de 2021, declaró procedente la acción de tutela y advirtió que la diferenciación realizada por la Corte Suprema de Justicia es contraria al precedente contenido en la sentencia SU-428 de 2016 y a la línea que había trazado el mismo Tribunal Ordinario desde el 2005, según el cual no existe diferencia entre la condición de pensionado y afiliado a efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Como fundamento de su decisión el Alto Tribunal expresó que una interpretación que crea una diferenciación entre las familias de pensionados y afiliados crea un criterio diferenciador que no tiene soporte constitucional por lo que se desconoce el derecho de igualdad. En palabras de la Corte:

La Sala Plena considera que esta distinción no corresponde con los propósitos de la pensión de sobrevivientes en general ni con los del requisito de convivencia, en particular. Así mismo, esa diferenciación no obedece a una justificación objetiva que atienda al principio de igualdad. Sobre este aspecto, debe tenerse en cuenta que cualquier distinción entre sujetos que acceden a la misma posición jurídica, en este caso la sustitución pensional o la pensión de sobrevivientes, según el caso, debe responder a una razón verificable y que suponga la atención de derechos, bienes o valores constitucionales significativos. De lo contrario, se estará ante una distinción arbitraria y, por ende, que vulnera el principio de igualdad.

Además del anterior argumento, sostuvo que la interpretación contenida en la sentencia 1730 de 2020 viola de forma directa el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, puesto que: “ *...ordenó el reconocimiento de la prestación sin acreditar la totalidad de los requisitos previstos por la legislación para el efecto y con sustracción del obligatorio análisis acerca de la existencia de un periodo mínimo de convivencia el cual, a su turno, es el soporte material de la dependencia económica entre el petitionario y el causante, ya sea este pensionado o afiliado.*”

En línea con lo expuesto y como quiera que existen para el caso dos sentencias de unificación la SU-428 de 2016 y SU-149 de 2021, cuya regla es que no existe diferencia entre la familia del pensionado y el afiliado en materia de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, esta Sala siguiendo los efectos

vinculantes de integración e interpretación conforme con la Constitución en lo que refiere a casos concretos que tienen las sentencias de unificación, acata el precedente constitucional y en ese sentido advierte que para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes tanto de afiliado como de pensionado debe existir un tiempo de convivencia mínima de 5 años.

De la prueba de la convivencia

En los hechos de la demanda se relata que el causante y la señora **Ilduara María Gaviria Espinosa** formaron una unión marital de hecho entre el año 2011 y el 2 de septiembre de 2018, afirmación que de conformidad con lo concluido por el juez a-quo fue demostrada a partir de los testimonios de los señores **Héctor Fabio Valencia Zapata, Guillermo Ignacio Leal y Antonio María Velásquez Cano.**

En este sentido destacó que si bien lo expresado por este grupo de testigos resulta totalmente disímil a los narrado por **María Lucía Bedoya de Arango, Jhon Jairo Arango Bedoya y Luz Marina Arango Bedoya**, existe unos aspectos en que los testigos traídos a juicio presentan uniformidad consistente en el abuso que el causante hacía de sustancias alcohólicas, alucinógenas y su ludopatía, aspectos que en detalle narró la demandante en su declaración de parte –la que si bien reconoce que este medio de prueba no puede servir para demostrar la propia prueba- si permite evidenciar actos de violencia del causante que no pueden ser pasados por alto, por lo que es claro la existencia de un periodo de convivencia que superó los 5 años y un proyecto de vida en común, en el que mediaron separaciones temporales atribuibles al carácter del señor **Arango Bedoya.**

Esta conclusión es debatida por la apoderada de **Protección S.A.** quien indica que en la investigación administrativa adelantada por esa entidad se pudo constatar que la pareja conformada por **Carlos Arturo Arango Bedoya** no tuvo una duración igual o superior a 5 años y que en todo caso en el último mes de vida el causante vivía con su señora madre.

En lo que refiere a estos aspectos, es importante resaltar que la investigación adelantada por la entidad se tuvo por cierta la versión presentada por la madre del causante, quien al diligenciar el formato de solicitud dijo que convivió con su hijo los últimos 8 años de vida de este (07/págs.94-95), narración a la que se acompañó entrevista realizada a esta misma y a los señores **Gloria Estella Arango Bedoya y Gloria Inés Echeverri Arroyave, Francisca Javier Yepes Bedoya y Jairo de Jesús Barrientos Patiño** y a partir de la cual determinó

que el causante no había convivido con la señora **María Lucila Bedoya de Arango**.

Se destaca de esta investigación aportada al proceso, que no hace relación a la existencia de la señora **Ilduara María Gaviria Espinosa**, lo que se explica en el hecho de que la misma tuvo como objetivo determinar dependencia económica de la madre (07/pág.134), pero quizás lo verdaderamente más destacable de la misma es que el causante convivió con su madre durante los últimos 8 años de su vida, conclusión que pierde cualquier eficacia, en el propio dicho de la progenitora como testigo en el proceso, donde admite que su hijo si hizo vida en común con la demandante, tal afirmación se encuentra en el audio de la audiencia de práctica de pruebas (min.2:14:15 a min.2:14:30) y en ellas se dice: “...vivió 11 meses doctor, él iba todos los días a la casa pero se estuvo allá 11 meses con ella...” (min.2:14:15 a min.2:14:30).

Esta manifestación permite encontrar una clara y evidente fisura en el grupo de testigos conformado por **María Lucía Bedoya de Arango, Jhon Jairo Arango Bedoya y Luz Marina Arango Bedoya** quienes intentaron ocultar la convivencia de su hijo y hermano con la señora **Ilduara María** y que se contrapone a lo informado por señores **Héctor Fabio Valencia Zapata, Guillermo Ignacio Leal y Antonio María Velásquez Cano**, quienes informaron de la relación de cercanía que tuvieron con la pareja integrada por la demandante y el causante, desde el año 2011, cuando conocieron a este último.

Este último grupo de testigos respaldó su dicho en la interacción que tenía con la pareja, dado que tenían vínculos de familiaridad con la señora **Ilduara María Gaviria Espinosa** y relatan que la convivencia entre los compañeros entrañó un proyecto de vida en común como pareja que inicio en el año 2011 y que terminó con la muerte del causante, siendo narrado con un mayor detalle estos hechos por el testigo **Guillermo Ignacio Leal**, quien dijo compartir la misma residencia porque su compañera es hija de la demandante y expresó conocer de las desavenencias de la pareja y de las separaciones temporales, en las que el señor **Carlos Arturo Arango Bedoya** se iba para la casa de su madre, reconociendo incluso que para el momento en que el causante falleció se encontraban en uno de esos ciclos.

Finalmente, hay un aspecto al que la apoderada de **Protección S.A.** resta importancia y es el que tiene que ver con el temperamento del causante de quien todos los testigos informan tenía problemas con el abuso de alcohol y su afición al juego, indicándose por parte del testigo **Guillermo Ignacio Leal** que

bajo condiciones de embriaguez el comportamiento del causante cambiaba y se tornaba en una persona posesiva frente a su compañera **Ilduara María Gaviria Espinosa**, aspecto en el que esta Sala llama la atención, pues como lo expresará el juez de primera instancia, se advierte unos actos de violencia respecto de la compañera, que a la postre generaron el distanciamiento, por lo que la separación temporal existente al momento de la muerte del causante, no puede tener la entidad para desconocer la existencia de una convivencia que como lo informan las pruebas tuvo una duración superior a los 5 años.

En ese sentido es importante memorar lo expresado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL-2010-2019, en la que se expresó:

Bajo esa línea de principio, la Corte estima que el presupuesto de la convivencia exigido legalmente no se puede descartar por la pura y simple separación de cuerpos de los cónyuges, específicamente en contextos en los que el presunto beneficiario ha sido sometido a maltrato físico o psicológico, que lo lleva forzosamente a la separación, como en el caso de la demandante. En escenarios de este tipo, no se puede culpar al consorte víctima de renunciar a la cohabitación y castigarlo con la pérdida del derecho a la pensión de sobrevivientes, pues, además de que la separación es un ejercicio legítimo de conservación y protección al derecho fundamental a la vida y la integridad personal, el legislador no lo puede obligar a lo imposible o establecerle cargas irrazonables, como lo reclamó la demandante en el texto de la demanda.

En ese sentido, encuentra esta Sala que fue acertada la decisión de primera instancia, motivo por el cual se **confirmará** la decisión apelada.

Del pago liberatorio respecto de mesadas pensionales

Solicita la apoderada de **Protección S.A.** que el pago de mesadas pensionales realizado al beneficiario **Esteban Arango López** tenga efectos liberatorios en la medida que fueron efectuadas a la persona a la que se estimo tenía un mejor derecho.

Con respecto a esta solicitud, advierte la Sala que desde el mismo reconocimiento de la prestación, la administradora de pensiones conoció de la controversia entre los potenciales beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, hecho que se desprende de la respuesta suministrada a la demandante el día **11 de septiembre de 2019** (04/pág.26) en la que se desestimó la existencia de su

derecho, siendo reconocido con posterioridad en su totalidad al hijo del causante (07/pags.112-113), elección que no puede ser oponible a la señora **Ilduara María Gaviria Espinosa**.

En este sentido se debe recordar que si bien la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha aceptado que existen supuestos en que el pago realizado a un beneficiario libera del reconocimiento de esos valores a un nuevo beneficiario en aplicación del principio de sostenibilidad financiera del sistema (CSJ SL870-2018, CSJ SL5034-2021, SL540-2021, CSJ SL226-2021), tales condiciones no se cumplen en el caso de autos, por cuanto los pretendidos beneficiarios reclamaron el derecho de forma contemporánea y no existe una relación entre la demandante y el codemandado a partir de la cual puede pregonarse que esta se benefició de las mesadas recibidas como lo es el caso del padre representante legal de los hijos menores.

En ese orden al tratarse de derechos excluyentes y haber la administradora de pensiones con pleno conocimiento de la disputa a reconocerlo en favor de uno de ellos, no puede hacer oponible su decisión a la demandante, siendo en este aspecto acertada la decisión de primera instancia, por lo que en consecuencia se **confirmará**.

Del pago del retroactivo a cargo del codemandado Esteban Arango López

Se solicita por parte de la apoderada de **Protección S.A.** que se imponga el pago retroactivo de la pensión al beneficiario **Esteban Arango López**, toda vez que este recibió el pago de la prestación en su totalidad cuando conforme a lo determinado en la sentencia su derecho era del 50%.

Con respecto a esta solicitud debe indicarse que no está llamada a prosperar, en razón a que el hijo del causante recibió el pago de estos dineros de buena fe y bajo la confianza de que la AFP a la que en vida estuvo afiliado su padre efectuó un estudio solido en el que determinó la ausencia de otros beneficiarios, no siéndole oponible los errores en que incurrió la administradora de pensiones al valorar la reclamación presentada por la señora **Ilduara María Gaviria Espinosa**, por lo que en este sentido tiene derecho a conservar los pagos efectuados, siendo exclusiva responsabilidad de **Protección S.A.** efectuar el pago del derecho prestacional retroactivo que mediante esta sentencia se le reconoció a la compañera permanente del señor **Carlos Arturo Arango Bedoya** por lo que en este sentido se **confirmará** la decisión apelada.

De la procedencia de la condena al pago de intereses moratorios

El apoderado de la parte actora solicita que se **revoque** la decisión de primera instancia en lo referente a la absolución del pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por cuanto **Protección S.A.** no dio cuenta de una investigación administrativa seria que condujera a la negativa del derecho pensional reclamado.

En lo que refiere a esta manifestación, es necesario recordar que, en el presente caso, es evidente la existencia de una controversia en el derecho, tanto así que con la sentencia que reconoció el derecho de la demandante se despojó al hijo del causante del 50% de la misma, situación que enmarca dentro de la causal de exoneración para la imposición de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

En este punto es importante destacar que la controversia que ha sido aceptada por la jurisprudencia es aquella que pueda poner en duda la existencia de un derecho, de tal forma que deba ser el juez quien en el marco de un proceso deba resolver si existe o no la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes (CSJ SL-5654-2021), elemento que se corrobora en el caso de autos, pues si bien la madre del causante no se encontraba en el mismo orden de hijo y compañera para reclamar el derecho, al solicitar el mismo presentó una versión de los hechos que nuevamente se trajo al proceso, a partir de la cual se pretendía desvirtuar la convivencia entre los compañeros permanentes, la cual solo después de una valoración probatoria, pudo ser desestimada para otorgar el derecho a la señora **Ilduara María Gaviria Espinosa**.

Bajo esas circunstancias encuentra esta Sala que la negativa de **Protección S.A.** del derecho no fue producto del capricho, sino de una controversia entre pretendidos beneficiarios, en la que optó por el reconocimiento del derecho en favor del hijo del demandante, estando por tanto en este caso dentro de una causal para la exoneración para la imposición de los intereses reclamados, por lo que en este punto se confirmará la decisión apelada.

De la procedencia de la indexación de las condenas

En lo referente a la orden de actualizar las condenas impuestas a cargo de **Protección S.A.**, es necesario recordar que esta orden se sustenta en un hecho objetivo que es la depreciación de la moneda ante los fenómenos inflacionarios, por lo que para garantizar que el pago se haga en forma

Radicado: 05001-31-05-014-2019-00667-01
Radicado Interno: P0362323
Asunto: Confirma sentencia

completa e íntegra es necesario que se indexe (Sentencias SL-5551-2021, SL-2159-2022 y SL-2257-2022), por lo que en este aspecto se **confirmará** la decisión apelada.

Costas

Sin costas en esta instancia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia de primera instancia dictada por el Juez Catorce Laboral del Circuito de Medellín, el día **17 de febrero de 2023**, en el proceso ordinario adelantado por la señora **ILDUARA MARÍA GAVIRIA ESPINOSA** contra **PROTECCIÓN S.A.** y **ESTEBAN ARANGO LÓPEZ**.

SEGUNDA: Sin costas en esta instancia.

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**.

LOS MAGISTRADOS


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA


GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ


HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

Radicado: 05001-31-05-014-2019-00667-01
Radicado Interno: P0362323
Asunto: Confirma sentencia



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario
Demandante	Ilduara María Gaviria
Demandado (s)	Protección S.A. y Esteban Arango López
Radicado	05001-31-05-014-2019-00667-01
Decisión	Confirma sentencia
Magistrado ponente	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 31 de marzo de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 31 de marzo de 2023 a las 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO